

Expediente: [REDACTED]

Actora: [REDACTED]
[REDACTED]

Autoridades demandadas:
DIRECTOR GENERAL DE
RECAUDACIÓN DEL ESTADO DE
MORELOS Y;
SUBPROCURADURÍA FISCAL DE
ASUNTOS ESTATALES DE LA
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE MORELOS.

Tercero interesado: NO EXISTE.

Ponente: MONICA BOGGIO
TOMASAZ MERINO,
MAGISTRADA TITULAR DE LA
PRIMERA SALA DE
INSTRUCCIÓN.

Cuernavaca, Morelos; a siete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente administrativo TJA/1ªS/208/2024, promovido por [REDACTED]
[REDACTED], por su propio derecho, en contra del
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL ESTADO DE
MORELOS Y; SUBPROCURADURÍA FISCAL DE ASUNTOS
ESTATALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA**

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

RESULTANDO

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el **veintisiete de junio de dos mil veinticuatro**, ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, compareció el actor promoviendo demanda de nulidad en contra de las autoridades demandadas, narró como hechos de su demanda, los que expresó en el capítulo correspondiente, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias aquí se tienen por íntegramente reproducidos, como si a la letra se insertasen; expresó las razones por las que impugna el acto; ofreció sus pruebas y concluyó con sus puntos petitorios.

2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. Por auto de **cinco de julio de dos mil veinticuatro**, se admitió la demanda ordenándose formar y registrar en el libro de Gobierno correspondiente, con las copias simples se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, para que dentro del término de diez días dieran contestación a la demanda, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se les tendría por precluido su derecho y por contestados en sentido afirmativo los hechos directamente atribuidos en su contra. Asimismo, se le tuvo por anunciadas las pruebas ofrecidas y se le condicionó la suspensión solicitada.

3. Contestación de demanda. Practicados que fueron los emplazamientos de ley, mediante auto de fecha **cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro**, se tuvo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma, a la demanda entablada en su contra, con lo que se mandó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho



correspondiera y se informó del término legal para ampliar su demanda.

4. Levantamiento de la suspensión. En fecha **cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro**, se dejó sin efectos la medida suspensiva concedida, en virtud de que, el actor no exhibió la garantía ordenada.

5. Desahogo de vista. El **tres de octubre de dos mil veinticuatro**, se tuvo a la parte actora por perdido su derecho para desahogar la vista señalada en autos.

6. Ampliación de demanda. Por acuerdo de fecha **veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro**, se tuvo a la parte actora por perdido su derecho para ampliar la demanda.

7. Apertura del juicio a prueba. Asimismo, por acuerdo de fecha **veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro**, por así permitirlo el estado procesal, la Sala instructora ordenó abrir el juicio a prueba, concediendo a las partes un término común, de cinco días para ofrecer las que estimaran pertinentes.

8. Pruebas. El **diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro**, se proveyó lo relativo a las pruebas de las partes y se señaló fecha para el desahogo de la Audiencia de Ley correspondiente.

9. Oficio de pago. Mediante auto de fecha **siete de marzo de dos mil veinticinco**, se ordenó girar oficio a la Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para efectos de informar si se encuentra pagado el crédito fiscal correspondiente. Cuya respuesta fue recibida en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.

10. Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha, **diez de**

marzo de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos.

10. Cierre de Instrucción. Por acuerdo de **dos de abril de dos mil veinticinco**, se declaró cerrada la instrucción, citando a las partes para oír sentencia, la que ahora se emite al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.-Competencia. Este Tribunal, es **competente** para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Federal; 109 Bis de la Constitución Local; 1, 3, 7, 84, 85, 86, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley de la materia; 1, 3, fracción IX, 4, fracción III, 16, 18, inciso B), fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

II. Existencia del acto. Por razón de método en el Juicio de Nulidad, en primer lugar se debe analizar y resolver respecto a la existencia o inexistencia del acto impugnado, pues de no existir el acto que se impugna, por razones de lógica, resultaría ocioso ocuparse de cualquier causa de improcedencia u ocuparse del estudio de fondo de la controversia planteada, es decir, que para el estudio de las causales de improcedencia, o de fondo, en primer lugar se debe de tener la certeza de que son ciertos los actos impugnados.

La parte actora, refirió como acto impugnado:

“ ...

Se impugna la resolución administrativa de 07 de noviembre de 2023 dictada en el recurso de revocación con expediente [REDACTED] Sic.

Persiguiendo las siguientes pretensiones

“

A. La nulidad de la resolución administrativa de 07 de noviembre de 2023 dictada en el recurso de revocación con expediente [REDACTED]

B. Como consecuencia de la primera se pretende la nulidad del cobro coactivo identificado con el folio [REDACTED]” Sic.

En ese sentido la existencia jurídica del acto impugnado, quedó acreditada con el original del oficio PF/E/XII/3451/2023, exhibido por la parte actora, que contiene la resolución de fecha **siete de noviembre de dos mil veintitrés**, recaída al Recurso de Revocación identificado con el número [REDACTED], suscrito por [REDACTED], en su calidad de **Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal**, en la cual, se resolvió desechar el recurso de revocación intentado por el actor, en contra del requerimiento de pago número [REDACTED] de fecha 30 de marzo de 2023.

Documental que obra a fojas 12 a 20, del proceso en que se actúa, a la que se le otorga pleno valor probatorio, dado su carácter público, de conformidad con lo establecido en los artículos 391, 490 y 491 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

III. Causales de Improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 37, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ésta potestad

procede a realizar el estudio de las causales de improcedencia, para verificar si en la presente controversia se actualiza alguna de las previstas en el precepto mencionado; ello en concordancia con lo establecido en el siguiente criterio jurisprudencial, de aplicación por analogía y de observancia obligatoria, según lo dispone el artículo 217, de la Ley de Amparo:

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.¹ *De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe*

¹Novena Época, Núm. de Registro: 194697, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 3/99, Página: 13.

otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

Así, este Tribunal advierte que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del artículo 37, de la Ley de la materia, como se explica.

En el asunto que nos ocupa, se advierte como un hecho notorio, que mediante oficio **TJA/DA/218/2025** (foja 117 del proceso), de fecha 24 de marzo de 2025, signado por la C. [REDACTED] Titular del Departamento de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa, dirigido al [REDACTED] Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, hizo del conocimiento que el **crédito fiscal número [REDACTED] fue pagado a la cuenta del Fondo Auxiliar de este Tribunal en el mes de diciembre del 2023**. Mismo crédito que fue materia del recurso de revocación intentado por el actor ante la sede administrativa, a través del recurso impugnado, como se precisa en la resolución por este medio combatida, en el capítulo correspondiente al acto que se impugna, en que se estableció literalmente:

“Se impugna la ejecución efectuada por la Dirección General de Recaudación del Estado de Morelos a través del oficio de 30 de marzo de 2023, con folio [REDACTED] notificada el 14 de abril de 2023, consistente en MULTA equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización impuesta por el Magistrado de la [REDACTED] Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos con

fundamento en el artículo 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por auto de 21 de febrero de 2023, en el expediente [REDACTED]” (sic).

Circunstancia que se corrobora con el contenido del acto impugnado consistente en la resolución aquí impugnada.

A razón de lo anterior, y toda vez que ha quedado sin efectos la multa controvertida al encontrarse pagada, es que se estima que, se actualiza la causal de sobreseimiento en términos de la fracción II, del artículo 38, en relación al artículo 37, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mismas que son del tenor siguiente:

“Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

XIII. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; ...

Artículo 38. Procede el sobreseimiento del juicio:

II. Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere esta Ley; “

En atención a que la materia de la resolución se extinguió, es inconcuso que cesaron sus efectos, así como, todo lo que se haya derivado del mismo, por lo tanto, ya no hay materia de Litis, sobre la cual se deba emitir un pronunciamiento de fondo.

En esta guisa, independientemente de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, de los anteriores actos, se estima actualizada en la especie la causal de sobreseimiento e

improcedencia prevista en la fracción II, del artículo 38, en relación al artículo 37, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa vigente en la entidad.

En efecto, por virtud de que la multa impuesta al ciudadano [REDACTED] en el diverso juicio de nulidad [REDACTED], del índice de la [REDACTED] Sala de este Tribunal, se encuentra pagado, por tanto, el acto impugnado quedó sin materia, lo que se traduce en que ya no puede surtir efecto legal alguno.

Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis número I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, localizable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, del Tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dispone:

CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un

recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.

Cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, por tanto, deviene innecesario y carente de objeto alguno continuar con el procedimiento y el dictado mismo de la sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos.

En ese contexto, al tenor de las consideraciones anteriores, es que se considera acreditada de manera manifiesta e indudable la actualización de la hipótesis de improcedencia y sobreseimiento en estudio, y ante ello, **IMPERA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD**, en los términos que dicta la fracción II, del artículo 38, en relación al artículo 37, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se:

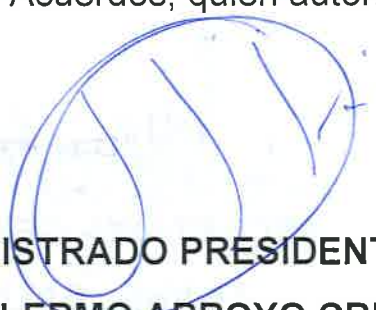
RESUELVE

PRIMERO. Este Tribunal Pleno es **competente** para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos vertidos en el primer punto de las razones y fundamentos de la presente resolución.

SEGUNDO. Se **sobresee** el presente juicio de nulidad por las razones y fundamentos establecidos en la parte considerativa III, de esta sentencia.

TERCERO. NOTIFÍQUESE como corresponda en términos de Ley y en su oportunidad archívese el presente asunto como definitiva y totalmente concluido.

Resolución definitiva emitida en sesión ordinaria de pleno y firmada por **unanimidad** de votos por los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrada **MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**, titular de la Primera Sala de Instrucción y ponente del presente asunto; Magistrada **VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**, titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas²; Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas³; ante **ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.


**MAGISTRADO PRESIDENTE
GUILLERMO ARROYO CRUZ**

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN


**MAGISTRADA
MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN**

² En términos del artículo 4 fracción I, en relación con la disposición Séptima Transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada el día 19 de julio del 2017 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.

³ *Idem*.


MAGISTRADA

VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN


MAGISTRADO

MANUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS


MAGISTRADO

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS


SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
ANABEL SALGADO CAPISTRÁN

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, hace constar: Que la presente hoja de firmas
corresponde a la resolución del expediente número
TJA/1ªS/208/2024, promovido por [REDACTED]
[REDACTED] por su propio derecho, en contra del DIRECTOR
GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

Y; SUBPROCURADURÍA FISCAL DE ASUNTOS ESTATALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; misma que fue aprobada en sesión ordinaria de pleno celebrado el día siete de mayo de dos mil veinticinco. Conste.



"2025, Año de la Mujer Indígena"

“En términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones IX y X y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracción XXI, 68 fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 3 fracciones XXV y XXVII, 49 fracción VI, 84, y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.

